

Santiago, octubre de 2009

Señor

Senador de la República
Presente

Estimado Senador:

Junto con saludarlo, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI), principal comunidad de empresas de la industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones en nuestro país, tiene el agrado de dirigirse a usted en representación de sus empresas socias para anticiparle un asunto relacionado con la Ley de Presupuesto de trascendencia para la industria.

En efecto, durante los últimos años se ha vuelto habitual en las discusiones de la Ley de Presupuesto, que algunos parlamentarios vean favorablemente glosas relativas a la adquisición de tecnología que establecen una preferencia tecnológica discriminatoria a favor de un modelo determinado.

Cabe destacar que, en la discusión de la Ley de Presupuesto el año 2006, el Ejecutivo comprometió un estudio que informara sobre la factibilidad y conveniencia de implementar OSS (software de código abierto) en la Administración Pública.

El estudio¹(disponible en www.estrategiadigital.gob.cl), fue realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y entre sus principales conclusiones establece una recomendación explícita de operar bajo el principio de **Imparcialidad Tecnológica Informada** en materia de adquisición de tecnología en el Sector Público. Lo anterior, con el objeto de no capturar ex/ante la decisión de las entidades públicas, sino que –por el contrario- que cada servicio o repartición puedan libremente evaluar caso a caso, y de acuerdo a sus requerimientos específicos (precio, seguridad, interoperabilidad, accesibilidad, etc.), la mejor solución tecnológica; la que, en algunos casos, será a través de la modalidad de código abierto y en otros de software licenciado.

¹ Uso de Software Libre en el Estado. Departamento de Ciencias de la Computación , PUC 2008 - 2009

Adicionalmente, el estudio explica que:

- En los diferentes países del mundo visitados durante su análisis, es posible encontrar experiencias, tanto positivas como negativas, en la implementación de soluciones de software libre.
- No es efectivo que el software libre sea gratuito, pues existen costos asociados tanto a su implementación como mantención y servicio, por lo que recomienda –a la hora de elegir la mejor alternativa tecnológica- considerar el TCO (Total Cost of Ownership o Costo Total de la Propiedad) de las diferentes soluciones tecnológicas que se pretendan adquirir.

Frente a la posibilidad de que este año nuevamente exista la intención de introducir una glosa –aparentemente inofensiva- pero que en definitiva establece una preferencia tecnológica a favor de un determinado modelo de negocios, es que como gremio representante de la industria tecnológica creemos necesario hacer ver los negativos efectos que ésta pudiera ocasionar de ser aprobada:

1.- Daño a la Industria Local de Software ya existente: Muchas empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes, licencian comercialmente sus programas computacionales y soluciones. Con glosas como las que se han intentado aprobar en años anteriores se limita su capacidad de competir en el Sector Público chileno, ya que cuando quieran ser contratadas requerirían una justificación especial, lo que se traduciría en una carga administrativa y –en definitiva- un desincentivo a su contratación.

2.- Resta agilidad a la contratación pública de software: El establecimiento de una cotización de alternativas de código abierto como requisito previo para adjudicar estas contrataciones, restringe la fluidez de la contratación de software. En muchos casos esa cotización no podrá obtenerse por no existir productos de código abierto similares y en otras será muy difícil saber si realmente son comparables con alternativas de software propietario. ¿Qué ocurre –entonces- si no es posible obtener esa cotización?, ¿qué pasa en un proceso de licitación si sólo se presentan alternativas de software propietarias?, ¿será ésta declarada forzosamente desierta, aún cuando exista una importante competencia entre proveedores que ofrecen alternativas de software comercial?; en lugar de imponer regulaciones legales que no facilitan el proceso de adquisición tecnológica, sino lo entorpecen, ¿no sería mejor que dicho tipo de consideraciones fuera regulado naturalmente, tanto por las bases de licitación de acuerdo a los requerimientos “caso a caso” como por las diferentes ofertas disponibles en el mercado?

3.- Viola el principio de la Neutralidad Tecnológica: Las soluciones de código abierto necesariamente no son gratuitas. La licencia puede ser gratuita, pero debe suscribirse un contrato de soporte con el proveedor que la otorga. Por ello, al establecerse la obligación de justificar administrativamente sólo en

el caso de la adquisición de software propietario y no para adquirir software de código abierto, se está discriminando positivamente en favor de un tipo de tecnología y de un modelo comercial, negando la posibilidad de libre competencia que debe operar necesariamente de acuerdo al mérito de la o las ofertas recibidas y las soluciones tecnológicas que se requieran.

4.- Resta competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile:

Las empresas de software comercial son parte de la Industria TIC Chilena, que constituye el 1,7% del PIB nacional, cifra que ya es inferior en al menos un punto porcentual en comparación con los países más desarrollados. Estas empresas generan importantes fuentes de empleo, directo e indirecto, y pagan impuestos año tras año. Cada vez hay más claridad en la relación directa que existe entre inversión en TIC, competitividad y productividad. Este tipo de medidas no ayudan a incentivar la creación de nuevas empresas de software comercial en Chile, por el contrario, al hacerles más difícil poder participar en las licitaciones del Sector Público, sólo contribuyen a disminuir el mercado potencial de sus negocios.

Por todo lo anterior, es que la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI), considera que contravenir el Principio de Neutralidad Tecnológica en el proceso de adquisiciones para el Sector Público podría violar garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, además de la libertad económica, la libre concurrencia y la economía social de mercado.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su buena acogida a nuestros planteamientos, se despide muy atentamente,



Hernán Orellana H.
Secretario Ejecutivo
ACTI AG